

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JURISDICCIONAL DEL PODER PÚBLICO



“Al servicio de la justicia y de la paz social”

TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN
SALA DE DECISIÓN CIVIL

PROCESO	SERVIDUMBRE
DEMANDANTE	INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA S.A. E.S.P
DEMANDADO	JOSÉ NELSON CARRILLO USTATE Y OTROS
INSTANCIA	SEGUNDA -APELACIÓN AUTO-
PROCEDENCIA	JUZGADO SÉPTIMO CIVIL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN
RADICADO	05001 31 03 007 2023 00056 01
	INTERNO 2023-049
PROVIDENCIA	AUTO INTERLOCUTORIO N° 062
TEMAS	EXAMEN DE ADMISIBILIDAD DE LA DEMANDA. INADMISIÓN Y RECHAZO.
DECISIÓN	CONFIRMA
MAGISTRADA PONENTE	MARTHA CECILIA OSPINA PATIÑO

Medellín, cinco (5) de mayo de dos mil veintitrés (2023).

Procede el Tribunal a decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, frente al auto proferido por el Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Medellín el día 22 de febrero de 2023 mediante el cual dispuso el rechazo de la demanda de servidumbre formulada por INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA S.A. E.S.P. (Archivo digital 07. Primera Instancia).

I. ANTECEDENTES

Actuando a través de apoderado judicial, Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P., presentó demanda en contra del señor José Nelson Carrillo Ustate, Karen Melisa Carrillo Ustate, Marili Concepción Ustate Pérez, Myriam Josefa Ustate Pérez, Omaira Leonor Ustate Pérez, Andrea Yaneth Ustate Valera, Yaneth Fernanda Ustate Valera y María Mercedes Ustate Valera como titulares del derecho real de domino del predio denominado La Providencia, ubicado en la vereda Cuestecitas, jurisdicción del Municipio Albania – La Guajira, identificado con la matrícula inmobiliaria No. 212-31363 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Maicao.

Como pretensiones solicita imposición de servidumbre legal de conducción de energía eléctrica y de telecomunicaciones a favor de la demandante para el proyecto COPEY – CUESTESITAS 500KV y COPEY – FUNDACIÓN 220K, con las líneas de conducción que detalla así:

“Inicial: K 00 + 211,00

Final: K 00 + 677,00

Longitud de Servidumbre: 466 metros.

Ancho de Servidumbre: 32 metros

Área de Servidumbre: 14.921,00 metros cuadrados

Cantidad de Torres: Con un (2) sitio para instalación de torres.” [sic]

Solicita también, se autorice a Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. para:

- “a) Pasar las líneas de conducción de energía eléctrica y de telecomunicaciones por la zona de servidumbre del predio afectado.*
- b) Instalar las torres necesarias para el montaje de las líneas.*
- c) Transitar libremente su personal por la zona de servidumbre descrita en la pretensión segunda de esta demanda (prueba 6), para construir sus instalaciones, verificarlas, repararlas, modificarlas, mejorarlas, conservarlas, mantenerlas y ejercer su vigilancia.*
- d) Remover cultivos y demás obstáculos que impidan la construcción o mantenimiento de las líneas.*
- e) Utilizar la infraestructura para sistemas de telecomunicaciones.*
- f) Autorizar a las autoridades militares y de policía competentes para prestarle a ISA la protección necesaria para el ejercer el goce efectivo de la servidumbre.*
- g) Utilizar las vías existentes en el predio del demandado para llegar a la zona de servidumbre con el equipo necesario para el montaje y mantenimiento de las instalaciones que integran el sistema de conducción de energía eléctrica y de telecomunicaciones, y/o Construir ya sea directamente o por intermedio de sus contratistas, vías de carácter transitorio. La empresa pagará al propietario el valor de los cultivos y de las mejoras que resulten afectadas con motivo de la construcción de estas vías.” [sic]*

Y, además, prohibir a los demandados la siembra de árboles, la ejecución de obras que obstaculicen el libre ejercicio del derecho de servidumbre, alta concentración de personas en estas áreas de servidumbre, o la presencia permanente de trabajadores o personas ajenas a la operación o mantenimiento de la línea, uso permanente de estos espacios como lugares de parqueo, o reparación de vehículos o para el desarrollo de actividades comerciales o recreacionales y oficiar al Registrador competente para que

ordene la inscripción de la sentencia en el correspondiente libro de Registro de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos.

Como peticiones especiales planteó: (i) con la admisión de la demanda se autorice la consignación de la suma de cuarenta y ocho millones setecientos treinta y ocho mil veintisiete pesos con cincuenta centavos (\$48.738.027,50), en la cuenta del Despacho, a favor de los demandados, suma que corresponde a la indemnización de perjuicios como consecuencia del paso aéreo de los cables para el proyecto COPEY – CUESTESITAS 500KV y COPEY – FUNDACIÓN 220K, y las líneas de Transmisión de Energía Eléctrica asociadas, la instalación de las torres a que haya lugar y las mejoras que sea necesario remover y; (ii) se autorice el ingreso al predio y la ejecución de las respectivas obras sin realizar previamente la inspección judicial (Archivo digital 03. Primera Instancia)

La demanda correspondió por reparto al Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Medellín, Despacho que mediante auto del 10 de febrero del año en curso dispuso su inadmisión (Archivo digital 04. Primera Instancia), exigiendo, entre otros requisitos, se aportará el avalúo catastral del predio objeto de servidumbre para efectos de determinación de la cuantía.

Dentro del término concedido para la subsanación, el apoderado de la parte demandante, a través de correo electrónico remitió escrito pretendiendo cumplir las exigencias realizadas por el despacho (Archivo digital 06. Primera Instancia), pero no arrimó el avalúo catastral, indicando que el predio carece de antecedentes catastrales, ya que no cuenta con cédula catastral que lo identifique, información sin la cual es imposible que exista un documento que certifique el valor catastral de éste.

En providencia de 22 de febrero de 2023 (Archivo digital 07. Primera Instancia), el juzgado de primera instancia decidió rechazar la demandada porque no se logró subsanar lo requerido, como quiera que no se desprende de ningún documento adjunto al escrito genitor, cuál es el valor catastral del predio sirviente, siendo ello una obligación de la parte demandante.

II. LA IMPUGNACIÓN.

Frente al anterior proveído la parte demandante a través de su apoderado judicial, formuló recurso de reposición y en subsidio apelación argumentando que se encuentra imposibilitada para dar cumplimiento a la exigencia del Despacho, por cuanto, de acuerdo a la información recolectada en campo por los gestores prediales de esa entidad, dicho predio carece de información catastral, en razón de ello, solicita se reconsidere la decisión de rechazo de la demanda, porque en caso contrario se configuraría un impedimento para acceder a la administración de justicia con exigencias inexistentes en las normas que regulan la materia (Archivo digital 08. Primera Instancia).

El Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Medellín, decidió no reponer y concedió el recurso de apelación en el efecto suspensivo (Archivo digital 09. Primera Instancia).

El expediente arribó a esta Corporación y fue repartido a este Despacho el 15 de marzo del año en curso, siendo procedente resolver de plano conforme establece el artículo 326 del Código General del Proceso.

III. CONSIDERACIONES

1. DEL EXAMEN DE ADMISIBILIDAD DE LA DEMANDA.

A fin de garantizar la concurrencia de los presupuestos procesales y así evitar sentencias inhibitorias y nulidades que afecten la validez del trámite, tiene diseñado el estatuto procesal civil una actuación determinante, misma que refiere al estudio de admisibilidad de la demanda y funge como el primer control de legalidad del ruego de tutela judicial. Para el Juez dicha actuación comporta el ejercicio de un deber-poder que puede dar lugar a la admisión de la causa, a su inadmisión o a su rechazo.

Tanto la inadmisión como el rechazo tienen en común la no aceptación inicial de la demanda; no obstante, ambas figuras difieren ostensiblemente en sus efectos dado que la primera comporta el aplazamiento de la aprobación de libelo genitor, previa concesión de oportunidad para la subsanación de

ciertos defectos; mientras que el rechazo supone el *definitivo* desprendimiento de la causa por parte de la autoridad judicial destinataria. Por supuesto que el rechazo puede estar precedido de la inadmisión de la demanda.

Sobre la materia que se viene destacando prevé el artículo 90 del Código General del Proceso:

Admisión, Inadmisión y Rechazo de la Demanda. El juez admitirá la demanda que reúna los requisitos de ley, y le dará el trámite que legalmente le corresponda aunque el demandante haya indicado una vía procesal inadecuada. En la misma providencia el juez deberá integrar el litisconsorcio necesario y ordenarle al demandado que aporte, durante el traslado de la demanda, los documentos que estén en su poder y que hayan sido solicitados por el demandante.

El juez rechazará la demanda cuando carezca de jurisdicción o de competencia o cuando esté vencido el término de caducidad para instaurarla. En los dos primeros casos ordenará enviarla con sus anexos al que considere competente; en el último, ordenará devolver los anexos sin necesidad de desglose.

Mediante auto no susceptible de recursos el juez declarará inadmisibile la demanda solo en los siguientes casos:

- 1. Cuando no reúna los requisitos formales.**
2. Cuando no se acompañen los anexos ordenados por la ley.
3. Cuando las pretensiones acumuladas no reúnan los requisitos legales.
4. Cuando el demandante sea incapaz y no actúe por conducto de su representante.
5. Cuando quien formule la demanda carezca de derecho de postulación para adelantar el respectivo proceso.
6. Cuando no contenga el juramento estimatorio, siendo necesario.
7. Cuando no se acredite que se agotó la conciliación prejudicial como requisito de procedibilidad.

En estos casos el juez señalará con precisión los defectos de que adolezca la demanda, para que el demandante los subsane en el término de cinco (5) días, so pena de rechazo. Vencido el término para subsanarla el juez decidirá si la admite o la rechaza.

Los recursos contra el auto que rechace la demanda comprenderán el que negó su admisión. La apelación se concederá en el efecto suspensivo y se resolverá de plano.

En todo caso, dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de la presentación de la demanda, deberá notificarse al demandante o ejecutante el auto admisorio o el mandamiento de pago, según fuere el caso, o el auto que rechace la demanda. Si vencido dicho término no ha sido notificado el auto respectivo, el término señalado en el artículo

121 para efectos de la pérdida de competencia se computará desde el día siguiente a la fecha de presentación de la demanda.

Las demandas que sean rechazadas no se tendrán en cuenta como ingresos al juzgado, ni como egresos para efectos de la calificación de desempeño del juez. Semanalmente el juez remitirá a la oficina de reparto una relación de las demandas rechazadas, para su respectiva compensación en el reparto siguiente.

Parágrafo Primero. La existencia de pacto arbitral no da lugar a inadmisión o rechazo de la demanda, pero provocará la terminación del proceso cuando se declare probada la excepción previa respectiva.

Parágrafo Segundo. Cuando se trate de la causa prevista por el numeral 4 el juez lo remitirá al defensor de incapaces, para que le brinden la asesoría; si esta entidad comprueba que la persona no está en condiciones de sufragar un abogado, le nombrará uno de oficio. (Negrillas fuera del texto original)

Importa igualmente destacar que, con los mismos fines de saneamiento y eficacia del proceso, el referido Estatuto Procesal contempla en su artículo 82 el contenido de toda demanda, enunciando en 11 numerales los requisitos mínimos de forma que debe contener la misma, para que permita el impulso del proceso que conlleve luego a la posibilidad de proferir una decisión que estudie el fondo del asunto en la demanda contenido, el mencionado artículo es del siguiente tenor literal:

Salvo disposición en contrario, la demanda con que se promueva todo proceso deberá reunir los siguientes requisitos:

1. La designación del juez a quien se dirija.
2. El nombre y domicilio de las partes y, si no pueden comparecer por sí mismas, los de sus representantes legales. Se deberá indicar el número de identificación del demandante y de su representante y el de los demandados si se conoce. Tratándose de personas jurídicas o de patrimonios autónomos será el número de identificación tributaria (NIT).
3. El nombre del apoderado judicial del demandante, si fuere el caso.
4. Lo que se pretenda, expresado con precisión y claridad.
5. Los hechos que le sirven de fundamento a las pretensiones, debidamente determinados, clasificados y numerados.
6. La petición de las pruebas que se pretenda hacer valer, con indicación de los documentos que el demandado tiene en su poder, para que este los aporte.
7. El juramento estimatorio, cuando sea necesario.
8. Los fundamentos de derecho.
- 9. La cuantía del proceso, cuando su estimación sea necesaria para determinar la competencia o el trámite.**
10. El lugar, la dirección física y electrónica que tengan o estén obligados a llevar, donde las partes, sus representantes y el apoderado del demandante recibirán notificaciones personales.
11. Los demás que exija la ley.

PARÁGRAFO PRIMERO. Cuando se desconozca el domicilio del demandado o el de su representante legal, o el lugar donde estos recibirán notificaciones, se deberá expresar esa circunstancia.

PARÁGRAFO SEGUNDO. Las demandas que se presenten en mensaje de datos no requerirán de la firma digital definida por la Ley 527 de 1999. En estos casos, bastará que el suscriptor se identifique con su nombre y documento de identificación en el mensaje de datos. (Negrillas fuera del texto original)

2. CASO CONCRETO.

En el presente caso, como se detalló en la parte expositiva, acontece que, de los diferentes requisitos exigidos para la admisión de la demanda se encontraron irregularidades que dieron lugar a la inadmisión de la misma, de los cuales sólo fue echado de menos finalmente, el relacionado con la determinación de la cuantía, que, según concluyó el *A Quo*, no se logró subsanar, procediendo entonces al rechazo de la demanda, al considerar el juez de primer grado que en los procesos de servidumbre como el presente, es necesario aportar el avalúo catastral del inmueble objeto de litigio para determinar la cuantía, por tratarse de asuntos donde la competencia puede recaer en el juez civil municipal o en el juez civil del circuito, de acuerdo a la cuantía que se establezca con el valor catastral del predio.

De modo pues que corresponde a este Despacho establecer si en este caso concreto era necesaria la determinación de la cuantía como requisito para la admisión de la demanda, así como la presentación del avalúo catastral del inmueble objeto de servidumbre según adujo el *a quo*, o si por el contrario, le asiste razón a la parte recurrente al señalar que la falta de avalúo catastral del predio conlleva a que la demanda deba ser imperiosamente admitida.

El artículo 25 del Código General del Proceso establece que: “*Cuando la competencia se determine por la cuantía, los procesos son de mayor, de menor y de mínima cuantía*”.

Y el artículo 26 ibídem regula la forma en que se determina la cuantía así:

- “1. Por el valor de todas las pretensiones al tiempo de la demanda, sin tomar en cuenta los frutos, intereses, multas o perjuicios reclamados como accesorios que se causen con posterioridad a su presentación.*
- 2. En los procesos de deslinde y amojonamiento, por el avalúo catastral del inmueble en poder del demandante.*

3. *En los procesos de pertenencia, los de saneamiento de la titulación y los demás que versen sobre el dominio o la posesión de bienes, por el avalúo catastral de estos.*
4. *En los procesos divisorios que versen sobre bienes inmuebles por el valor del avalúo catastral y cuando versen sobre bienes muebles por el valor de los bienes objeto de la partición o venta.*
5. *En los procesos de sucesión, por el valor de los bienes relictos, que en el caso de los inmuebles será el avalúo catastral.*
6. *En los procesos de tenencia por arrendamiento, por el valor actual de la renta durante el término pactado inicialmente en el contrato, y si fuere a plazo indefinido por el valor de la renta de los doce (12) meses anteriores a la presentación de la demanda. Cuando la renta deba pagarse con los frutos naturales del bien arrendado, por el valor de aquellos en los últimos doce (12) meses. En los demás procesos de tenencia la cuantía se determinará por el valor de los bienes, que en el caso de los inmuebles será el avalúo catastral.*
7. ***En los procesos de servidumbres, por el avalúo catastral del predio sirviente.*** (Resaltado intencional).

De las normas en cita se concluye que, en los procesos de servidumbre, establecer la cuantía es fundamental para determinar la competencia y que, ello se realiza con el valor catastral del predio sirviente, esto es, del predio al cual se pretende imponer servidumbre, siendo imperioso entonces que la parte demandante, afirme de forma sustentada el valor catastral del bien.

Ahora, analizado el libelo genitor se evidencia que, desde el principio, en el acápite de la cuantía, la parte actora omite señalar si el litigio se trata de uno de mínima, menor o mayor cuantía, mucho menos el valor catastral sustentado del bien, señalando en dicho punto que el predio objeto de servidumbre no cuenta con avalúo catastral y que esa situación al no estar regulada en el Código General del Proceso implica que deba ser conocido por el juez de circuito en virtud de la cláusula general de competencia y, al pretender subsanar la demanda dice que realizó gestiones a fin de recolectar información y documentación en las diferentes bases de datos a las que tiene acceso y peticiones a diferentes entidades, pero que de acuerdo a la información que le brindaron los ocupantes del predio y el IGAC, el inmueble carece de antecedentes catastrales, siendo imposible obtener el avalúo catastral solicitado por el juzgado.

De lo anterior se desprende claramente que la parte demandante no cumplió con el requisito de determinar la cuantía, pues ni siquiera afirmó fundadamente cuál era el valor catastral del predio al cual pretende se le imponga la servidumbre pretendiendo ampararse en una imposibilidad que no demostró.

Nótese que señala en el recurso que realizó gestiones para obtener el avalúo catastral, pero no arrimó prueba alguna que dé cuenta de esas diligencias efectuadas, en tanto no presentó las consultas en las bases de datos, ni las solicitudes realizadas al IGAC, mucho menos dijo haber realizado, ni presentó tampoco, petición alguna dirigida a la autoridad catastral en la que indagara por el valor catastral del predio objeto de discusión.

No desconoce este Despacho que los procesos de servidumbre de conducción de energía eléctrica son de interés público, pero ello no puede implicar que se deban dejar de lado las normas de competencia cuyo desconocimiento conlleva a la configuración de nulidades, como tampoco puede desconocerse que la entidad demandante es una profesional en la materia de energía eléctrica, con amplia experiencia en el tema de servidumbres de este tipo, la cual debe efectuar necesariamente labores previas a la iniciación del proceso encaminadas a obtener la información y documentación necesaria para acudir al litigio, siendo totalmente inadecuado incluso que indique que fueron los ocupantes del predio quienes le señalaron que el mismo no tenía cédula catastral y no demuestre haber efectuado las conductas pertinentes para constatar esa información con las autoridades administrativas pertinentes.

De manera pues, que los argumentos planteados, sin la acreditación de la imposibilidad aducida, conllevan a que este Tribunal comparta la decisión del juez de primer grado, porque ni siquiera se afirmó fundadamente el valor catastral del predio, ni se arrimó constancia de las indagaciones efectuadas para obtenerlo.

3. COLOFÓN Y COSTAS.

Como en definitiva no se cumplió con el requisito relativo a la determinación de la cuantía, exigido en el auto inadmisorio de la causa, procedía el rechazo de la presente demanda, y por ende, la **CONFIRMACIÓN** en esta instancia del auto apelado.

No obstante, la resolución de la instancia ser negativa para la parte recurrente, no habrá lugar a imponer condena en costas, toda vez que no se

causaron. Lo anterior atendiendo la regla 8 del artículo 365 del Código General del Proceso.

Por lo expuesto, la **suscrita Magistrada Sustanciadora de la Sala Civil del Tribunal Superior de Medellín,**

IV. RESUELVE

PRIMERO. CONFIRMAR el auto de fecha 22 de febrero de 2023 por el Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Medellín, mediante el cual se dispuso el rechazo de la demanda de la referencia, por las razones expuestas.

SEGUNDO. ABSTENERSE de imponer condena en costas.

NOTIFÍQUESE Y DEVUÉLVASE

MARTHA CECILIA OSPINA PATIÑO

Magistrada

(Firma electrónica conforme al artículo 105 del C.G.P. en concordancia con la Ley 2213 de 2022)

Firmado Por:

Martha Cecilia Ospina Patiño

Magistrado Tribunal O Consejo Seccional

Sala 007 Civil

Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **b7abf2612ac9e46b7068d20041aa448fd7836cd020fd50d3d38454469f1ca376**

Documento generado en 05/05/2023 11:41:43 AM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>